

No. 42098

**Colombia
and
Venezuela**

Treaty between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Venezuela on the transfer of sentenced persons. Caracas, 12 January 1994

Entry into force: *6 October 1996 by notification, in accordance with article XII*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Colombia, 1 December 2005*

**Colombie
et
Venezuela**

Traité entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif au transfèrement des personnes condamnées. Caracas, 12 janvier 1994

Entrée en vigueur : *6 octobre 1996 par notification, conformément à l'article XII*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Colombie, 1er décembre 2005*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS CONDENADAS**

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela;

Animados por el deseo de fomentar la cooperación en materia penal;

Considerando que dicha cooperación mejorará la eficacia de la administración de justicia y facilitará la rehabilitación social de los penados de ambos Estados;

Persuadidos de que con el cumplimiento de la pena en su país de origen se contribuirá a la rehabilitación de los penados;

Deseosos de establecer los mecanismos que permitan fortalecer la administración de justicia por medio de la cooperación internacional;

Reconociendo que la asistencia entre las partes para la ejecución de sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política bilateral de cooperación;

Animados por el objetivo común de garantizar la protección de los derechos humanos de los condenados asegurando siempre el respeto de su dignidad;

Guiados por los principios de amistad y cooperación que prevalecen en sus relaciones, han convenido celebrar el presente Tratado por el cual se regulan los traslados de las personas condenadas, en uno de los dos Estados Partes cuando fueren nacionales venezolanos o colombianos;

ARTICULO I

AMBITO DE APLICACION

1. Las penas impuestas en la República de Venezuela a nacionales colombianos podrán ser cumplidas en la República de Colombia en establecimientos penitenciarios o bajo la supervisión de autoridades colombianas, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

2. Las penas impuestas en la República de Colombia a nacionales venezolanos podrán ser cumplidas en la República de Venezuela en establecimientos penitenciarios o bajo la supervisión de autoridades venezolanas de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

3. Los Estados parte del presente Tratado, se obligan a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslados de personas condenadas.

4. Normas Aplicables: El traslado de personas se registrará única y exclusivamente por las normas contenidas en el presente Tratado.

ARTICULO II

DEFINICIONES

A los fines del presente Tratado, la expresión:

1. "Estado Trasladante" significa el Estado donde haya sido dictada la sentencia condenatoria y del cual la persona sentenciada habrá de ser trasladada.

2. "Estado Receptor" significa el Estado al cual se traslada la persona sentenciada para continuar con la ejecución de la sentencia proferida en el Estado Trasladante.

3. "Persona Sentenciada" es la persona que ha sido condenada por un Tribunal o Juzgado del Estado Trasladante mediante sentencia condenatoria y que se encuentra en prisión, pudiendo también estar bajo el régimen de condena condicional, libertad preparatoria, o cualquier otra forma de libertad sujeta a vigilancia.

ARTICULO III

JURISDICCION

1. La persona sentenciada continuará cumpliendo en el Estado Receptor, la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado Trasladante y de acuerdo con las leyes y procedimientos del Estado Receptor sin necesidad de exequátur.

2. El Estado Trasladante o el Estado Receptor con consentimiento del Trasladante, podrán conceder la amnistía, el indulto, la conmutación de la pena o medida de seguridad o adoptar cualquier decisión o medida legal que entrañe una reducción de la pena o medida de seguridad. Las solicitudes del Estado Receptor serán fundadas y examinadas benévolamente por el Estado Trasladante.

Sólo el Estado Trasladante podrá conocer del recurso o acción de revisión.

3. La persona sentenciada trasladada para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado no podrá ser detenida, procesada ni condenada en el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada.

4. Bajo ninguna circunstancia, la condena impuesta en el Estado Trasladante podrá aumentarse en el Estado Receptor.

ARTICULO IV

CONDICIONES DE APLICABILIDAD

El presente Tratado se aplicará bajo las siguientes condiciones:

1. Que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan un delito de acuerdo con las normas del Estado Receptor.

- A. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado Receptor.

3. Que la persona sentenciada no esté condenada por un delito político o militar.

4. Que exista sentencia condenatoria y no hayan otros procesos pendientes en el Estado Trasladante.

5. Que las demás disposiciones de la sentencia, fuera de la privación de la libertad, pero incluidas las relativas a la responsabilidad civil, hayan sido satisfechas.

6. Que la decisión de trasladar personas para el cumplimiento de sentencias penales, se adopte caso por caso.

7. Que los Estados Trasladante y Receptor se comprometan a comunicar a la persona sentenciada las condiciones legales de su traslado, y que a su vez ésta manifieste el compromiso expreso de colaborar con la justicia del Estado Receptor.

8. Que la persona sentenciada solicite su traslado o en caso de que dicha solicitud provenga del Estado Trasladante o del Estado Receptor, la persona sentenciada manifieste su consentimiento expresamente y por escrito.

ARTICULO V

AUTORIDADES CENTRALES

Las Partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este Tratado al Ministerio de Justicia por parte de la República de Venezuela y al Ministerio de Justicia y del Derecho, por parte de la República de Colombia.

ARTICULO VI

OBLIGACION DE FACILITAR INFORMACIONES

1. Cualquier condenado a quien pueda aplicarse este Tratado deberá estar informado por los Estados Trasladante y Receptor del tenor del presente Convenio, así como de las consecuencias jurídicas que se derivan del traslado.
2. Si la persona sentenciada hubiese expresado al Estado Trasladante su deseo de ser trasladado en virtud del presente Tratado, dicho Estado deberá informar de ello al Estado Receptor con la mayor diligencia posible.
3. Las informaciones comprenderán:

- a. El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona sentenciada;
 - b. En su caso, la dirección domiciliaria de la persona a ser trasladada;
 - c. Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;
 - d. La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena.
4. Si el condenado hubiese expresado al Estado Receptor su deseo de ser trasladado en virtud del presente Tratado, el Estado Trasladante comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que se refiere el párrafo 3 que antecede.
 5. Deberá informarse por escrito al condenado de cualquier gestión emprendida por el Estado Receptor o el Estado Trasladante en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una solicitud de traslado.

ARTICULO VII

PETICIONES Y RESPUESTAS

1. Las peticiones de traslado y la respuesta se formularán por escrito y se dirigirán a las autoridades centrales designadas en el presente Tratado.

2. El Estado Receptor y el Estado Trasladante tendrán facultad discrecional para rechazar el traslado de la persona sentenciada, y deberán comunicar su decisión a la parte solicitante. La notificación al otro Estado de la resolución denegatoria del traslado, no necesita ser motivada.

3. El Estado requerido informará al Estado requirente, con la mayor diligencia posible, de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

ARTICULO VIII

BASES PARA LA DECISION

1. Al tomar la decisión sobre el traslado de la persona sentenciada, cada Parte considerará, entre otros, los siguientes criterios en la aplicación del presente Tratado:

a. El Tratado se aplicará de manera gradual y progresiva;

b. Las decisiones de cada Estado, aceptando o denegando un traslado en aplicación de este Tratado serán soberanas;

c. Al tomar sus decisiones cada Estado tendrá en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de los delitos, sus características y especialmente si se han cometido con ayuda de una organización delictiva, las posibilidades de reinserción, la edad y salud del condenado, su situación familiar, su disposición a colaborar con la justicia y la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias respecto a las víctimas.

ARTICULO IX

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA

1. El Estado Receptor, a petición del Estado Trasladante facilitará a este último:

a. Un documento o una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado;

b. Una copia de las disposiciones legales del Estado Receptor de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado Trasladante constituyen una infracción penal con arreglo al derecho del Estado Receptor o la constituirían si se cometiera en su territorio.

2. Si se solicitare un traslado, el Estado Trasladante deberá facilitar al Estado Receptor los documentos que a continuación se expresan, a menos que uno u otro de los dos Estados haya indicado que ya no está de acuerdo con el traslado:

a. Una copia certificada de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;

b. La indicación del tiempo de condena ya cumplido, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, otorgamiento de subrogados penales u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;

c. Una declaración en la que conste el consentimiento de la persona sentenciada para el traslado; y

d. Cuando proceda, cualquier informe médico o social acerca del condenado, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado Trasladante y cualquier recomendación para la continuación de dicho tratamiento en el Estado Receptor.

3. El Estado Trasladante y el Estado Receptor podrán, uno u otro, solicitar que se les facilite cualquiera de los documentos o declaraciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 que anteceden, antes de solicitar un traslado o tomar la decisión de aceptar o denegar el traslado.

ARTICULO X

CARGAS ECONOMICAS

La entrega de la persona sentenciada por las autoridades del Estado Trasladante a las autoridades del Estado Receptor se efectuará en el lugar en que convengan Las Partes en cada caso.

El Estado Receptor se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona sentenciada quede bajo su custodia.

ARTICULO XI

INTERPRETACION

1. Ninguna de las disposiciones contenidas en este Tratado puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona sentenciada un derecho al traslado.

2. Las dudas o controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución del presente Tratado serán resueltas por la vía diplomática,

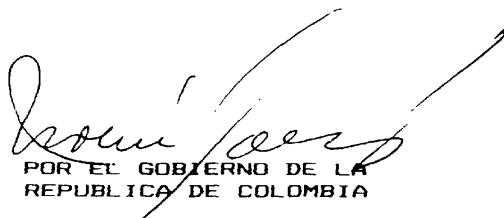
ARTICULO XII

VIGENCIA Y TERMINACION

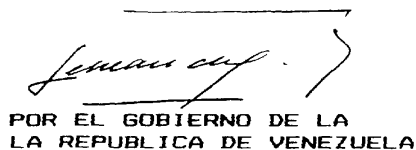
1. El presente Tratado entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la última notificación en que Las Partes se comuniquen por Nota Diplomática el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos.
2. Cualquiera de los Estados podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación escrita al otro Estado. La denuncia entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de notificación.

Las solicitudes que hayan sido presentadas a la fecha de la denuncia del presente Tratado, seguirán su trámite normal sin que se vean afectadas.

Suscrito en Caracas a los doce (12) días del mes de Enero de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.



POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA



POR EL GOBIERNO DE LA
LA REPUBLICA DE VENEZUELA

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Venezuela,

Motivated by the wish to encourage cooperation in criminal cases;

Considering that this cooperation shall improve effectiveness in the administration of justice and facilitate the social rehabilitation of convicts in both States;

Persuaded that serving their sentence in their home country shall help the rehabilitation of convicts;

Desiring to establish mechanisms for strengthening the administration of justice through international cooperation;

Recognizing that assistance between the Parties for the enforcement of judgments in criminal proceedings is an important component of bilateral cooperation policy;

Motivated by the common objective of guaranteeing the protection of the human rights of sentenced persons by ensuring that their dignity is always respected;

Guided by the principles of friendship and cooperation that govern their relations, have agreed to conclude this Treaty to regulate the transfer of persons sentenced in either of the States Parties, if they are Venezuelan or Colombian citizens.

Article I. Scope

1. Sentences imposed in the Republic of Venezuela on Colombian citizens may be served in the Republic of Colombia in prisons or under supervision by Colombian authorities, in accordance with the provisions of this Treaty.

2. Sentences imposed in the Republic of Colombia on Venezuelan citizens may be served in the Republic of Venezuela in prisons or under supervision by Venezuelan authorities, in accordance with the provisions of this Treaty.

3. The States Parties to this Treaty shall commit themselves to providing each other with the broadest possible cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.

4. Applicable rules: The transfer of persons shall be governed solely and exclusively by the rules stipulated in this Treaty

Article II. Definitions

For the purposes of this Treaty:

1. "Transferring State" shall mean the State in which the sentence has been pronounced and from which the sentenced person is to be transferred.

2. "Receiving State" shall mean the State to which the sentenced person is transferred in order to continue to serve the sentence pronounced in the transferring State.

3. "Sentenced Person" shall mean a person who has been convicted by a tribunal or court in the transferring State, has been sentenced and is in prison, under a suspended sentence regime, on parole or on any other form of probation.

Article III. Jurisdiction

1. Sentenced persons shall continue serving in the receiving State the sentence or security measure imposed in the transferring State, in accordance with the laws and procedures of the receiving State, without need for authorization to enforce a foreign judgment.

2. The transferring State, or the receiving State with the consent of the transferring State, may grant amnesty, pardon or commutation of the penalty or security measure, or take any legal measure or decision entailing reduction of the sentence or security measure. Requests by the receiving State shall be substantiated and they shall be examined benevolently by the transferring State.

Only the transferring State may hear an appeal or action for judicial review.

3. A sentenced person transferred for serving the sentence in accordance with this Treaty may not be detained, prosecuted or sentenced in the receiving State for the same offence that gave grounds for the sentence to be served.

4. The sentence imposed in the transferring State may under no circumstance be increased in the receiving State

Article IV. Conditions for applicability

This Treaty shall be implemented subject to the following requirements:

1. The acts or omissions that gave grounds for the sentence shall constitute an offence under the law of the receiving State.

2. The sentenced person shall be a citizen of the receiving State.

3. The sentenced person shall not have been convicted for a political or military offence.

4. A sentence shall exist and no other actions shall be pending in the transferring State.

5. The other provisions of the sentence, over and above imprisonment but including those related to civil liability, shall have been met.

6. The decision to transfer persons for serving criminal sentences shall be taken on a case-by-case basis.

7. The transferring and the receiving State shall inform the sentenced person of the legal conditions for the transfer. In turn, the sentenced person shall be explicitly committed to cooperating with the courts of the receiving State.

8. The sentenced person shall request the transfer or, in the event that the request stems from the transferring or the receiving State, shall give his/her consent explicitly and in writing.

Article V. Central authorities

1. The Parties shall designate the Ministry of Justice, for the Republic of Venezuela, and the Ministry of Justice and Law, for the Republic of Colombia, as central authorities responsible for carrying out the responsibilities stipulated in this Treaty.

Article VI. Obligation to provide information

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed by the transferring and the receiving State of the terms of this Treaty and of the legal consequences of the transfer.

2. If the sentenced person expresses to the transferring State the wish to be transferred under this Treaty, that State shall so inform the receiving State with the greatest possible diligence.

3. The information shall include:

- (a) The sentenced person's name and date and place of birth;
- (b) Where appropriate, the residential address of the person to be transferred;
- (c) A description of the acts that led to the sentence;
- (d) The nature, duration and starting date of the sentence.

4. If the sentenced person expresses to the receiving State the wish to be transferred under this Treaty, the transferring State shall transmit to that State, upon that State's request, the information referred to in paragraph 3 above.

5. The sentenced person shall be informed in writing of any step taken by the receiving State or the transferring State pursuant to the preceding paragraphs and of any decision taken by either State concerning a request for transfer.

Article VII. Requests and replies

1. Requests for transfers and replies to such requests shall be made in writing.

2. The receiving State and the transferring State shall have discretionary power to refuse the transfer of the sentenced person and shall communicate their decision to the requesting State. There shall be no obligation for the notification of a negative decision to the other State to be reasoned.

3. The requested State shall make its decision to accept or refuse the requested transfer known to the requesting State with the greatest possible diligence.

Article VIII. Criteria for the decision

1. In making a decision on the transfer of a sentenced person, each Party shall consider inter alia the following criteria regarding the implementation of this Treaty:

(a) The Treaty shall be applied gradually and progressively.

(b) The decisions of each State to accept or refuse a transfer under this Treaty shall be sovereign.

(c) In arriving at a decision, each State shall consider, among other factors, the seriousness of the crimes, their characteristics and, in particular, whether they were committed with the help of a criminal organization, the possibilities for rehabilitation, the sentenced person's age, health, family situation and willingness to collaborate with the courts and the discharge of financial liabilities in respect of the victims.

Article IX. Supporting documentation

1. The receiving State, upon the transferring State's request, shall provide that State with:

(a) A document or statement indicating that the sentenced person is a citizen of that State;

(b) A copy of the receiving State's legal provisions, on the basis of which the acts or omissions that gave grounds for the conviction in the transferring State constitute criminal offences under the law of the receiving State or would constitute such offences, if committed in its territory.

2. If a transfer is requested, the transferring State shall provide the receiving State with the documents listed below, unless either State has already indicated that it does not agree to the transfer:

(a) A certified true copy of the judgement and the legal provisions applied;

(b) Indication of the time of sentence already served, including information on any pre-trial detention, approval of penal substitutes or any other circumstance related to serving the sentence;

(c) A statement evidencing the sentenced person's consent to the transfer;

(d) Where applicable, any medical or social report on the sentenced person, any information about his or her treatment in the transferring State and any recommendation for the continuation of the treatment in the receiving State.

3. Before requesting a transfer or deciding to accept or refuse it, the transferring State and the receiving State may ask to be provided with any of the documents or statements referred to in paragraphs 1 and 2 above.

Article X. Costs

The handing over of the sentenced person by the authorities of the transferring State to the authorities of the receiving State shall be carried out at a place agreed upon by the Parties on a case-by-case basis.

The receiving State shall be responsible for the transfer costs once the sentenced person is in its custody.

Article XI. Interpretation

1. None of the provisions of this Treaty may be interpreted as establishing a sentenced person's right to a transfer.
2. Any questions or disputes over the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled through the diplomatic channel.

Article XII. Validity and termination

1. This Treaty shall enter into force 60 days after the date of the last notification through which the Parties inform each other by diplomatic note that their internal constitutional and legal requirements have been fulfilled.
2. Either State Party may terminate this Treaty by a written notice to the other State. The termination shall take effect six months after the date of notice.

Requests that have been presented at the date on which this Treaty is terminated shall follow the normal procedure and shall not be affected by the termination.

Signed at Caracas on 12 January 1994, in two copies in the Spanish language, both being equally authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:

For the Government of the Republic of Venezuela:

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA RELATIF AU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Venezuela;

Animés du désir de favoriser la coopération en matière pénale;

Considérant que cette coopération améliore l'efficacité de l'administration de la justice et facilite la réinsertion sociale des personnes condamnées des deux États;

Persuadés que l'exécution d'une peine dans leur pays d'origine facilite la réinsertion des personnes condamnées;

Désireux de mettre en place les mécanismes qui permettent de renforcer l'administration de la justice par le biais de la coopération internationale;

Reconnaissant que l'assistance entre les Parties pour l'exécution des sentences pénales est un aspect important de la politique bilatérale de coopération;

Animés du même désir de garantir la protection des droits fondamentaux des personnes condamnées en assurant toujours le respect de la dignité;

Guidés en conséquence par les principes d'amitié et de coopération qui régissent leurs relations, ont convenu de conclure le présent Traité qui régleme le transfèrement des personnes condamnées dans l'un des deux États parties lorsqu'il s'agit de ressortissants vénézuéliens ou colombiens;

Article premier. Champ d'application

1. Les peines imposées dans la République du Venezuela à des ressortissants colombiens peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires de la République de Colombie ou sous la surveillance d'autorités colombiennes, conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Les peines imposées dans la République de Colombie à des ressortissants vénézuéliens peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires de la République du Venezuela ou sous la surveillance d'autorités vénézuéliennes, conformément aux dispositions du présent Traité.

3. Les États parties au présent Traité sont tenus de s'accorder mutuellement la coopération la plus importante possible en matière de transfèrement de personnes condamnées.

4. Règles applicables : le transfèrement de personnes est régi uniquement et exclusivement par les règles contenues dans le présent Traité.

Article II. Définitions

Aux fins du présent Traité :

1. L'expression "État de transfèrement" désigne l'État qui a imposé la condamnation et à partir duquel la personne condamnée devra être transférée.
2. L'expression "État d'accueil" désigne l'État où doit être transférée la personne condamnée pour continuer l'exécution de la sentence imposée dans l'État de transfèrement.
3. L'expression "Personne condamnée" désigne la personne qui a été condamnée par un tribunal ou un juge de l'État de transfèrement en vertu d'un jugement définitif et qui se trouve en prison, en surveillance sans détention, en liberté provisoire ou sous une forme ou une autre de liberté surveillée.

Article III. Juridiction

1. La personne condamnée continue de purger dans l'État d'accueil la peine ou la mesure de sécurité imposée dans l'État de transfèrement, conformément aux lois et procédures de l'État d'accueil, sans nécessité d'exequatur.
2. L'État de transfèrement ou l'État d'accueil, avec le consentement du premier État, peuvent accorder l'amnistie, la remise de peine, la commutation de peine ou une mesure de sécurité ou encore prendre toute décision ou mesure juridique qui entraîne une réduction de la peine ou de la mesure de sécurité. Les pétitions de l'État d'accueil sont fondées et examinées avec bienveillance par l'État de transfèrement.
Seul l'État de transfèrement peut connaître du recours ou de l'action en révision.
3. La personne condamnée transférée pour l'exécution d'une sentence en application du présent Traité ne peut être détenue, jugée ni condamnée dans l'État d'accueil pour le même délit que celui à l'origine de la sentence à exécuter.
4. En aucune circonstance, la condamnation imposée dans l'État de transfèrement ne peut être augmentée dans l'État d'accueil.

Article IV. Conditions d'applicabilité

L'application du présent Traité est subordonnée aux conditions suivantes:

1. Les actes ou omissions qui ont abouti à la condamnation doivent constituer un délit conformément aux normes de l'État d'accueil.
2. La personne condamnée doit être un ressortissant de l'État d'accueil.
3. Le délit à l'origine de la condamnation ne doit pas être de nature politique ou militaire.
4. Le jugement doit être définitif et tous les recours doivent avoir été épuisés dans l'État de transfèrement.
5. Les autres dispositions de la condamnation, hormis la privation de liberté, mais notamment les dispositions relatives à la responsabilité civile, doivent avoir été satisfaites.

6. La décision de transfèrement de personnes pour l'exécution de condamnations pénales est adoptée au cas par cas.

7. Les États de transfèrement et d'accueil doivent s'engager à informer la personne condamnée des conséquences juridiques de son transfèrement, cette dernière devant refléter expressément l'engagement de collaborer avec la justice de l'État d'accueil.

8. La personne condamnée doit demander son transfèrement ou, si la demande émane de l'État de transfèrement ou de l'État d'accueil, la personne condamnée doit donner son consentement exprès par écrit.

Article V. Autorités centrales

Les Parties désignées comme des Autorités centrales chargées d'exercer les fonctions prévues au présent Traité sont le Ministère de la justice de la République du Venezuela et le Ministère de la justice et du droit de la République de Colombie.

Article VI. Obligations de fournir des Informations

1. Toute personne condamnée à laquelle le présent Traité sera applicable doit être informée par l'État de transfèrement et par l'État d'accueil de la teneur dudit Traité, ainsi que des conséquences juridiques découlant du transfèrement.

2. Si la personne condamnée a informé l'État de transfèrement qu'elle souhaite être transférée en vertu du présent Traité, ledit État devra le faire savoir à l'État d'accueil le plus tôt possible.

3. Des informations devront comprendre les éléments suivants:

- a. Le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;
- b. Le cas échéant, l'adresse de la personne devant être transférée;
- c. Un résumé des faits ayant entraîné la condamnation;
- d. La nature, la durée et la date du début de la peine.

4. Si la personne condamnée a informé l'État d'accueil de son désir d'être transférée en vertu du présent Traité, l'État de transfèrement communiquera à l'État d'accueil, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3.

5. La personne condamnée devra être informée par écrit de toutes les démarches entreprises par l'État d'accueil ou par l'État de transfèrement en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet de toute demande de transfèrement.

Article VII. Demandes et Réponses

1. Les demandes de transfèrement et les réponses correspondantes devront être formulées par écrit et adressées aux Autorités centrales désignées dans le présent Traité.

2. L'État d'accueil et l'État de transfèrement pourront décider de façon discrétionnaire de rejeter le transfèrement de la personne condamnée, et devront communiquer leur déci-

sion à la Partie qui le demande. La notification à l'autre État de la décision négative de transfèrement n'aura pas à être motivée.

3. L'État requis informe l'État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article VIII. Motifs de la décision

1. Lors de la décision concernant le transfèrement de la personne condamnée, chaque Partie tient compte, notamment, des critères suivants d'application du présent Traité:

- a. Le Traité s'appliquera de façon progressive et graduelle;
- b. Les décisions de chaque État d'accepter ou de refuser un transfèrement en application du présent Traité sont souveraines;
- c. Lors de sa décision, chaque État tient compte entre autres, de la gravité du délit, de ses caractéristiques et notamment du fait que la personne condamnée a pu bénéficier de l'aide d'une organisation criminelle, des possibilités de réinsertion, de l'âge et de la santé de la personne condamnée, de sa situation familiale, de sa disposition à collaborer avec la justice et de l'accomplissement des obligations pécuniaires vis-à-vis des victimes.

Article IX. Pièces justificatives

1. À la demande de l'État de transfèrement, l'État d'accueil devra communiquer à ce dernier:

- a. Un document ou une déclaration attestant que la personne condamnée est un ressortissant dudit État;
- b. Une copie des dispositions juridiques de l'État d'accueil en vertu desquelles les actes ou omissions ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de transfèrement constituent un délit conformément aux lois de l'État d'accueil ou sont punissables sur son territoire.

2. Si un transfèrement est demandé, l'État de transfèrement doit communiquer à l'État d'accueil les documents mentionnés ci-après, à moins que l'un ou l'autre des deux États ne refuse le transfèrement:

- a. Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions juridiques appliquées;
- b. L'indication de la durée de la peine déjà purgée, y compris des informations sur toute détention préventive, remise de peine ou autres circonstances relatives à l'accomplissement de la peine;
- c. Une déclaration consignait le consentement de la personne condamnée concernant son transfèrement; et
- d. Le cas échéant, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'État de transfèrement et toute recommandation pour la poursuite de son traitement dans l'État d'accueil.

3. L'État de transfèrement et l'État d'accueil peuvent demander que leur soit communiqués les déclarations ou documents visés aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés avant de demander un transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Article X. Frais

La remise de la personne condamnée par les autorités de l'État de transfèrement à celles de l'État d'accueil s'effectue au lieu convenu entre les Parties.

L'État d'accueil prend à sa charge le transfèrement à partir du moment où la personne condamnée se trouve sous sa garde.

Article XI. Interprétation

1. Aucune des dispositions contenues dans le présent Traité ne peut être interprétée comme accordant à la personne condamnée le droit au transfèrement.

2. Les doutes ou différends pouvant surgir concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité seront résolus par la voie diplomatique.

Article XII. Entrée en vigueur et Résiliation

1. Le présent Traité entrera en vigueur dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de la dernière notification dans laquelle les Parties s'informent par note diplomatique du respect de leurs critères constitutionnels et juridiques internes.

2. L'un ou l'autre des États parties peut dénoncer le présent Traité moyennant notification écrite à l'autre État. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de notification.

Les demandes présentées avant la date de dénonciation du présent Traité continuent leur cours sans être affectées par ladite dénonciation.

Fait à Caracas le 12 janvier 1994, en deux exemplaires en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :